

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 26 de 1872.—Vis-
to el juicio de amparo promovido ante
el Juzgado de Distrito de Jalisco, por
Guadalupe Madrigal, contra el juez 2º
de lo criminal de Guadalajara, por no
haberse dictado dentro del término cons-
titucional el auto de bien preso, respec-
to del quejoso; y considerando: que en
el expediente aparece, que dicho auto se
dictó dentro del término, se decreta:
Que se confirma la sentencia pronun-
ciada el 29 del próximo pasado, por el
juez de Distrito de Jalisco, que declara:
que la Justicia de la Union no am-
para ni protege á Guadalupe Madrigal,
por no haberse violado en su contra por
la autoridad que lo juzga, la garantía
que asegura el art. 19 de la Constitu-
cion Federal de 1857.

Devuélvanse las actuaciones al Juz-
gado de que proceden con copia certifi-
cada de este auto, para los efectos con-
siguientes; y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo de-
cretaron los CC. Presidente y Minis-
tros que formaron el Tribunal pleno de
la Corte Suprema de Justicia de los
Estados-Unidos mexicanos, y firma-
ron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la*
Garza.—*José Arteaga.*—*Pedro Or-*
das.—*Ignacio Ramirez.*—*M. Anza.*
—*Simón Guzman.*—*Luis Velazquez.*—
M. Zavala.—*José García Ramirez.*—
Luis María Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México, No-
viembre 30 de 1872.—*Lic. Agustín Pe-*
ralta, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido por Pedro
Ibarra contra el C. Prefecto de Puruándi-
ro, que mandó incendiar una casa perte-
neciente al quejoso.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El 5 de Setiembre próximo anterior
se presentó en ese Juzgado el C. Pedro
Ibarra, pidiendo amparo de garantías
contra los procedimientos del C. Prefec-
to de Puruándiro, con motivo de haber
este mandado destruir, tanto la casa del
quejoso, como las de otras personas re-
sidentes en la hacienda de Villachuato.

La autoridad responsable no niega los
hechos, limitándose á disculpar sus pro-
cedimientos con la circunstancia de ser
gente pernicioso y de mala conducta la
que habitaba dichas casas, y con la de
estar facultado para ello el propietario
de la hacienda de Villachuato, en virtud
de las cláusulas del contrato de arrenda-
miento que inserta el C. alcalde 1º de
Puruándiro en el certificado que expidió
á solicitud del C. Prefecto.

Por otra parte; la informacion testimo-
nial producida por el quejoso es demasia-
do satisfactoria para su objeto, así como
tambien la que se ve en el testimonio
que se registra en estas diligencias de fo-
jas 14 á la 18 frente. En consecuencia,
aparece probado de una manera perfec-
ta en derecho, que el C. Prefecto de Pu-
ruándiro destruyó y aun incendió las ca-
sas de algunos individuos que, ya en ca-
lidad de arrendatarios ó subarrendata-
rios, están avocindados en la hacienda
de Villachuato.

Desde luego se palpa, que tal funcio-
nario se extralimitó de sus facultades,
destruyendo ó incendiando las casas de
tales individuos, cuando todavía estaban
ocupadas por estos, ó autorizando tal
destruccion; porque aun en el supuesto
de que el dueño de la hacienda de Villa-
chuato, por virtud de estipulaciones ex-
peciales con sus arrendatarios, tuviese

el derecho de hacer suyas las casas construidas por estos, reputándolas como mejoras hechas á la hacienda, y aun de destruir tales casas si le conviene hacerlo; se comprende desde luego que tal destruccion debió verificarse despues de haber procedido al desahucio de aquellas: tambien se comprende, que si los arrendatarios no hacian espontáneamente la desocupacion, el propietario de la hacienda debia haberse presentado á la autoridad judicial competente, pidiendo el lanzamiento de los arrendatarios rebeldes, y una vez obtenido aquel, hacer de las casas el uso que creyese conveniente.

Pero ni el Prefecto de Puruándiro es la autoridad ante quien el propietario de Villachuato debia haber solicitado el desahucio, ni los procedimientos empleados por aquel funcionario son los que las leyes determinan para asuntos de esa naturaleza.

A estas reflexiones hay que agregarse, que en las cláusulas trascritas en la certification de que se ha hecho mérito, no aparece comprobado el derecho del propietario de Villachuato para emplear contra sus arrendatarios procedimientos tan perjudiciales, tan violentos y tan crueles, como los que han dado márgen á la queja de Ibarra.

Está, pues, fuera de duda que el C. Prefecto de Puruándiro obró de una manera arbitraria y muy fuera de sus deberes mandando destruir y aun incendiar las casas de algunos individuos residentes en tal hacienda, porque aun cuando estos sean hombres perniciosos, nocivos y criminales, ya las leyes han prescrito la forma y manera de proceder en casos semejantes.

Tales hechos podrian, pues, servir de un buen fundamento para solicitar amparo de garantías contra los procedimientos arbitrarios del C. Prefecto de Puruándiro; pero puesto que los hechos están ya consumados, las casas destruidas é incendiadas, no pueden suspenderse los

efectos de las determinaciones del C. Prefecto, no puede evitarse el mal porque ya está completamente causado; no pueden volverse, en fin, las cosas al ser y estado que antes tenian, que es el objeto del amparo y el fin con que se solicita la proteccion de la autoridad Federal.

Este caso podria equipararse á aquel en que se tratase de libertar la vida de un individuo, cuando ya se le hubiese dado la muerte.

En virtud, pues, del estado que guardan las cosas, el Promotor entiende que ya no cabe el amparo, y que por lo mismo el quejoso podrá presentarse ante quien corresponda á exigir al C. Prefecto de Puruándiro las responsabilidades de que se ha hecho reo con los procedimientos que han motivado el presente recurso.

En consecuencia, este Ministerio Fiscal se ve en el caso de pedir á vd., como efectivamente pide, se sirva declarar que la Justicia de la Union no ampara al C. Pedro Ibarra contra los procedimientos del C. Prefecto de Puruándiro, en virtud de no haber ya el recurso, puesto que aquellos están enteramente consumados, y no poder ya volverse las cosas al ser y estado que antes tenian, quedándole al quejoso sus derechos á salvo contra aquel funcionario para que los deduzca como, ante quien, y cuando le convenga.

Morelia, Octubre 25 de 1872.—*Mariano de Jesus Torres.*

Es copia que certifico. Morelia, Octubre 31 de 1872.—*Isidro Aleman.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Morelia, Octubre 30 de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Pedro Ibarra, contra la providencia del C. Prefecto de Puruándiro que mandó destruir y quemar la casa habitacion del quejoso, y la de su hijo Juan, cre-

yendo con esto violada en su persona las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 del Código fundamental; y resultando justificado el hecho, motivo de la queja, tanto del informe del C. Prefecto como de la prueba testimonial rendida por Ibarra, pues las circunstancias de ser este, así como los demás vecinos del rancho de la Presa de Herrera, nocivos y sospechosos de mala conducta, y la de haber obrado así el C. Prefecto por solicitud del administrador de la hacienda de Villachuato, á donde pertenece el rancho referido; aun suponiéndolas probadas no autorizaban al funcionario dicho para proceder de un modo tan violento como inusitado: pues en el caso de la primera, debería haber consignado á Ibarra y demás vecinos de la Presa á su juez competente para que los juzgara, y en el de la segunda ordenar al propietario de Villachuato que dedujera sus derechos en forma y ante la autoridad debida. Considerando: que aunque consumados los hechos, motivo de la queja, no son irreparables y pueden restituirse las cosas al ser y estado que tenían antes de la violación, que es el efecto natural de los juicios de amparo, según lo prevenido en el art. 23 de la ley orgánica de la materia. Teniendo, en fin, presente que la providencia mandada y ejecutada por el C. Prefecto de Purnándiro envuelve una infracción notoria de los artículos 16 y 27 de la Constitución, con fundamento del 101 de esta y de la ley citada de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia Federal ampara y protege á Pedro Ibarra, contra la providencia del C. Prefecto de Purnándiro, quien violó en la persona de aquel las garantías de los artículos 16 y 27 de la Carta federal, dejando al ofendido sus derechos á salvo para que los ejercite contra quien y como deba. Hágase saber; publíquese y remítanse las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia.

Definitivamente juzgando lo decretó el C. juez de Distrito de Michoacan; doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—Ante mí, *Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Octubre 31 de 1872.—*Isidro Aleman*.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 27 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por Pedro Ibarra, contra el Gefe político de Purnándiro, responsable del acto reclamado, O. Albino Fuentes Acosta, que mandó incendiar la casa del quejoso, sita en el rancho de la Presa de Herrera perteneciente á la hacienda de Villachuato, atendiendo á que en el expediente aparece plenamente probado, que por órden del referido Prefecto de Purnándiro se derribaron ó incendiaron varias casas en el rancho mencionado, entre cuyas casas, á mas de la del quejoso, se cuentan las de Juan Ibarra, Dionisia Cuevas, Lugarda Núñez, Antonio Ramos, Juan Rivera, Rafael Ceballos, Doroteo Rodríguez, Anastasio Ochoa, Nazario Quesadas, Basilio Escobar, Ramon Cuevas y otras mas que no se especifican; y considerando: que el acto reclamado no solo importa la violación de las garantías á que se refieren los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal, sino tambien un hecho criminoso respecto del que debe procederse con arreglo á las leyes á lo que haya lugar: que el efecto de los amparos es que se restablezcan las cosas al estado en que se hallaban antes de verificarse el acto reclamado, como lo expresa el art. 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, y que si en el caso no es posible que la cosa incendiada se devuelva á Ibarra, puesto que el incendio la consumió, bien puede

ser que sea repuesta por la autoridad responsable formando una igual á la incendiada, ó que se indemnice al quejoso del importe total de ella, dejando á eleccion de este, como perjudicado, lo uno ó lo otro: por lo expuesto, y de conformidad con lo que ordena el art. 101 de la Constitucion federal, se decreta: Que se reforma la sentencia pronunciada el 30 del próximo pasado Octubre, por el juez de Distrito de Michoacan, segun la que la Justicia Federal ampara y protege á Pedro Ibarra, contra la providencia del C. Prefecto de Purnándiro quien violó en la persona de aquel las garantías de los artículos 16 y 27 de la Carta federal, dejando al ofendido sus derechos á salvo para que los ejercite contra quien y como deba, y se declara:

1º: Que la Justicia de la Union ampara y protege á Pedro Ibarra para que la autoridad responsable vuelva, á su costa, las cosas al estado que guardaban antes de consumarse el acto, ó indemnice al quejoso; dejando á arbitrio de este escoger entre la reposicion y la indemnizacion.

2º: Dese conocimiento al Tribunal Superior del Estado de Michoacan, con las inserciones conducentes de los hechos á que se refiere este amparo, para que en su vista decrete el procedimiento á que haya lugar.

3º: Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velaz-*

quez.—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Noviembre 29 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por Apolonia Rivero, á nombre de su hijo Lázaro Suarez, contra el coronel del escuadron núm. 12 de caballería, que obliga á Lázaro á prestar servicios militares.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Promotor dice: que el presente recurso de amparo fué interpuesto por Apolonia Rivero, á nombre de su hijo Lázaro Suarez, quejándose de que el día 29 de Enero último, fué aprehendido su citado hijo por una comision y llevado al cuartel de Peredo, donde fué dado de alta en el cuerpo núm. 12 de caballería, violándose las garantías que le concede el art. 5º de la Constitucion, encontrándose además comprendido en las excepciones de la ley de 17 de Mayo, por sostener á la madre anciana. Pedido el informe de la ley al C. coronel del cuerpo, lo ha rendido manifestando que el quejoso fué tomado de leva el mes de Enero, cuando por las facultades extraordinarias estaban suspensas las garantías individuales, y en época en que no habia sido expedida la ley de 17 de Mayo. Como esto es una verdad, pues basta solo la comparacion de fechas, puede el Juzgado declarar que la Justicia Federal no ampara ni protege al C. Lázaro Suarez.

México, Octubre 19 de 1872.—*Herrera Campos.*